

Un año de guerra civil

1981 ha sido un año en el que la guerra, una sorda y destructiva guerra civil, se ha enseñoreado de El Salvador. A este mismo diagnóstico han llegado, desde perspectivas muy diversas, organismos internacionales, instituciones humanitarias y numerosas instancias nacionales incluso del propio gobierno. La aceptación de este diagnóstico es muy importante, ya que sólo el reconocimiento objetivo de la situación del país permitirá empezar a enfrentar con realismo los gravísimos problemas que le aquejan. El concepto de guerra civil refleja adecuadamente los tres rasgos que han caracterizado a El Salvador a lo largo de 1981: el exacerbamiento de la violencia social, una prolongada crisis política y un catastrófico deterioro socioeconómico. El reconocimiento de que El Salvador se encuentra en estado de guerra civil muestra, además, los términos reales del problema fundamental que se enfrenta así como los caminos que ofrecen y los que no ofrecen una salida a ese problema.

1. El azote de la violencia social.

La violencia ha sido la característica más visible y más significativa en la vida social de El Salvador a lo largo del año recién transcurrido, la nota que nos ha valido un triste renombre internacional y que nos ha hecho figurar a la cabeza de la lista negra de todas las organizaciones humanitarias mundiales. Dos formas principales ha revestido la violencia social: la represiva y la bélica.

La represión violenta por causas políticas ha alcanzado, cuantitativa y cualitativamente, niveles intolerables. No sólo se ha continuado con las prácticas de regímenes anteriores, prácticas que justificaron el golpe de Estado de 1979 y que se había prometido terminar, sino que se han incrementado y han apare-

cido formas nuevas de represión hasta llegar a extremos de abrumadora crueldad. Más de mil asesinatos por mes, que es el número de víctimas de la represión política en El Salvador durante 1981, es un hecho que ninguna doctrina ni ningún interés grupal puede justificar. Si la "seguridad nacional" exige semejante sangría, con ello mismo está dictando sentencia sobre su irracionalidad.

A los asesinatos hay que añadir los "desaparecimientos", cuya cifra ha ido progresivamente subiendo, hasta alcanzar un promedio record de ciento cincuenta por mes. Y como si el acoso físico y moral, la tortura, la desaparición y el asesinato fueran poco, una nueva modalidad represiva ha hecho su aparición en El Salvador: la crueldad ostentosa. ¿Cómo calificar, si no, la aparición en basureros públicos de cadáveres horriblemente mutilados, el descubrimiento de cuerpos guillotizados en serie o de miembros humanos diseminados por los caminos del país? Como señala el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 20 de octubre de 1981, "muchas veces los cuerpos se encuentran desnudos, sin identificación, algunas veces incinerados, las mujeres por lo general violadas y, en fin, las personas dejan huellas de haber sido objeto de innumerables apremios que seguramente han sido la causa directa de su muerte" (pág. 112). ¿En nombre de qué o de quién se puede llegar a estos extremos?

A la vista de semejantes hechos, resulta un sarcasmo que se acuse de difamación a quienes internacionalmente denuncian estas acciones o que se utilice el estribillo de la "mala imagen" del país como respuesta al repudio mundial. Si lo que sucede en el país es más que malo, lo menos que se puede esperar es una mala imagen. Lo repudiable no está en denunciar públicamente estos hechos, sino en que hechos tan execrables ocurran en El Salvador. No son malos salvadoreños los que condenan la tortura y los asesinatos ante foros internacionales, sino aquellos que torturan y asesinan a sus propios conciudadanos, o quienes con su silencio se hacen cómplices de tales prácticas.

Es difícil que logre legitimación cualquier régimen que para subsistir requiera o al menos tenga que aceptar o tolerar semejantes prácticas represivas. Los datos muestran que, en lo tocante a la represión, El Salvador no ha mejorado sino que, por el contrario, ha empeorado gravemente desde 1979. Así lo han entendido múltiples organismos internacionales, que se han visto obligados a condenar la represión en nuestro país; así lo ha comprendido también la Organización de las Naciones Unidas, que en diciembre emitió una seria condena a las prácticas represivas del actual régimen; así lo manifestó el mencionado informe ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informe celosamente ocultado a la conciencia nacional; así lo han proclamado incluso el Senado y el Congreso norteamericanos, a quienes difícilmente se puede acusar de

“conjura comunista” y que, en su rechazo a las prácticas represivas en El Salvador, se han tenido que oponer a la misma administración del señor Reagan.

Aunque la violencia represiva hay que cargarla principalmente a la cuenta de las fuerzas políticas y económicas en el poder, también los insurgentes han aportado su grano de irracionalidad. A lo largo de este año, miembros del FMLN han realizado no menos de 250 “ajusticiamientos”, muchos de ellos en circunstancias oscuras y algunos de ellos abiertamente repudiables. Aunque ni en el número ni en el carácter de los hechos se pueda parangonar la actividad represiva de las fuerzas oficiales o paraoficiales con la de las fuerzas insurgentes, ello no la justifica en modo alguno ni permite excusarla. Más aún, la ética que esgrimen los sectores insurgentes y que les da derecho a alzarse en rebeldía en nombre de la justicia, les obliga a un comportamiento radicalmente diferente al de los regímenes que repudian, de una manera muy principal en el respeto a la vida de las personas. En este sentido, hay que condenar con energía no pocas muertes causadas en 1981 por miembros del FMLN fuera del campo de batalla.

Desde el 10 de enero la violencia de una guerra formal, aunque no convencional, ha sumado sus horrores en el país a los estragos de la violencia represiva. El enfrentamiento de dos ejércitos reales (que eso es, en primera instancia, una guerra) constituye una gangrena que poco a poco invade todos los rincones del país. Quizá las toneladas de armas mortíferas enviadas pródigamente a El Salvador por gobiernos como el de Estados Unidos sean una insignificancia en el contexto de los grandes gastos armamentistas del mundo actual. Sin embargo, esos instrumentos de muerte representan un peligro inaceptable para una población pequeña, como la nuestra, hacinada en un espacio proporcionalmente más pequeño y que cuenta con muy escasos recursos naturales.



Young guerrillas, armed with automatic rifles, wait to go on patrol in Morazán province

Las dimensiones de la guerra han ido creciendo a lo largo del año. La ofensiva final o general de enero fue sólo el inicio de una nueva etapa, cuya sucesiva profundización es fácil de observar. En 1981, la Fuerza Armada ha desarrollado no menos de 40 grandes operativos militares, algunos de ellos de larga duración, movilizand o varios miles de hombres y utilizando ingentes cantidades de pertrechos bélicos. Por su parte, las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han realizado numerosas acciones militares de carácter guerrillero como ocupación de poblados, ataques a cuarteles o puestos militares, emboscadas y pequeños combates, fuera del creciente sabotaje a diversos sectores del aparato productivo. No pretendemos hacer aquí un balance de la guerra en su aspecto militar. Lo que importa es subrayar que la confrontación armada entre dos ejércitos, no por distintos menos reales, se va extendiendo rápidamente a todos los ámbitos de la República, amenazando con dejarla totalmente arrasada.

Hasta ahora, el número de víctimas de la misma guerra no parece haber sido muy grande, aunque sea bastante mayor que el que aceptan los informes públicos de los contendientes. Hay grandes discrepancias entre los datos sobre bajas ofrecidos por las diversas fuentes informativas. Pero aun poniéndonos en el mejor de los casos, que siempre es un caso lamentable, no cabe duda que son varios cientos (quizá varios miles) los salvadoreños caídos en los campos de batalla, y otros cientos o miles más los heridos y mutilados por la guerra.

Con todo, la violencia bélica ha hecho sus principales estragos entre la población civil. Al parecer, los asesores norteamericanos han convencido a los militares salvadoreños sobre la bondad de la "táctica vietnamita", según la cual la manera más segura de eliminar al pescado es dejando a la pecera sin agua. Y el agua es la población civil. Así, hemos visto con estremecimiento y horror cómo se ha ido perdiendo cualquier vestigio de respeto a la vida colectiva: poblaciones enteras desplazadas o arrasadas por bombardeos inmisericordes, operativos zonales de aniquilamiento, matanzas incalificables de poblados completos. No menos de veintiuna matanzas colectivas se pueden contabilizar a lo largo de 1981, con cifras que oscilan entre las 35 y las 950 personas asesinadas. Existen testimonios escalofriantes sobre las últimas matanzas, que habrían tenido lugar en diciembre, en el Departamento de Morazán, como consecuencia de un operativo gigantesco llamado "Yunque y martillo", y que se habrían cebado no en los guerrilleros, sino en ancianos, mujeres y niños de la población civil. Más allá de discursos justificatorios, excusas ideológicas o declaraciones de buenas intenciones, ésta es la guerra y éstos son sus horribles resultados.

2. La crisis política.

A la violencia generalizada del país ha correspondido una permanente crisis en los aparatos del Estado, principalmente en el equipo gubernamental. La causa inmediata fundamental de esta crisis permanente hay que verla en la incapacidad objetiva del grupo gobernante para promover un proyecto político mínimamente viable. Al recuperar posiciones al interior del sistema los sectores pro-oligárquicos tradicionales han logrado que se descartara lo esencial del programa político esbozado en la proclama militar del 15 de octubre de 1979. Sin embargo, su propuesta de un simple retorno a los esquemas del pasado resultaba demasiado costosa internacionalmente a los Estados Unidos, ya que tendría que apoyarse en un verdadero genocidio, sin que ni siquiera eso garantizara su viabilidad a mediano plazo. De ahí que el gobierno de Washington, tomadas las riendas de la política salvadoreña, persistiera en mantener en el gobierno a la Democracia Cristiana del Ingeniero Duarte como la solución transitoria menos mala. Sin embargo, el reformismo conservador de la DC ha chocado una y otra vez con la intransigencia de las grandes corporaciones del capital salvadoreño y con la fuerza factual de los mandos más integristas al interior de la Fuerza Armada, con lo que ni la restauración de los unos ni el reformismo de los otros ha podido progresar. Esta falta de consenso en el sector dominante, unida a la oposición más o menos activa de los sectores populares mayoritarios y a la escéptica pasividad de los sectores medios, se ha expresado en un gabinete de gobierno recurrentemente incompleto, una política de apariencias, la interiorización de la ilegitimidad y una subordinación factual a los imperativos de la guerra y a las exigencias del sector militar dominante.

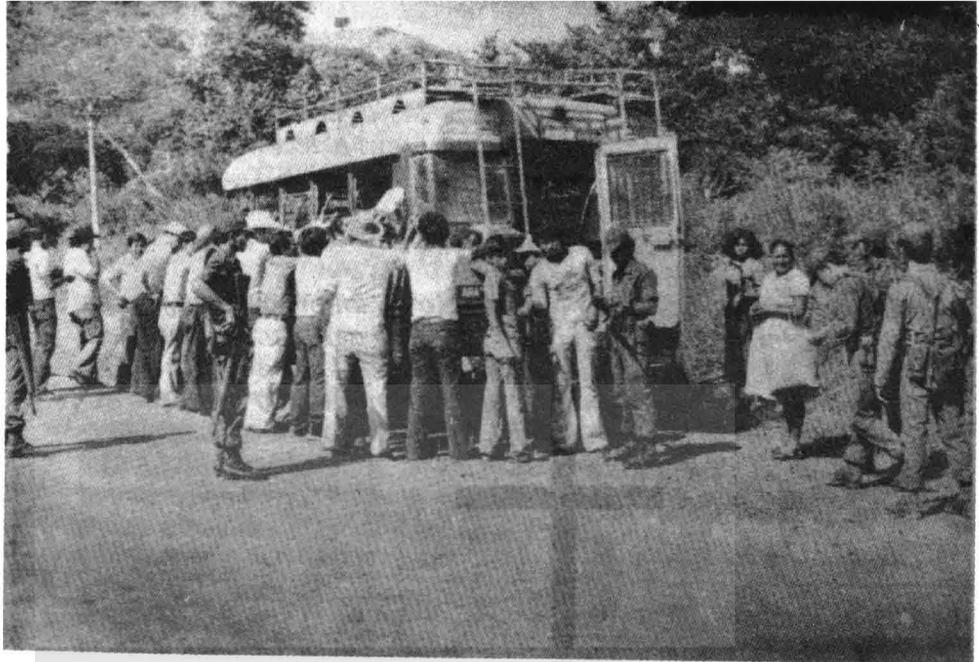
No ha habido acuerdo en las esferas gobernantes sobre las reformas iniciadas en 1980, lo que ha ido dando al traste con sus virtualidades mejores. La reforma bancaria no ha pasado de ser un relevo burocrático, sin que las políticas financieras o crediticias cambiaran en lo fundamental; las puertas de los bancos han seguido abiertas para quienes ya disponen de recursos y cerradas para quienes no los tienen. La nacionalización del comercio exterior no ha logrado encauzar para el bien común fondos que antes quedaban en manos particulares, quizás en parte por el momento crítico del café en el mercado internacional. Finalmente, la reforma agraria ha tenido que limitarse a algunos aspectos de su primera fase, y las pocas evaluaciones que se han ido realizando sobre sus resultados presentan conclusiones poco halagüeñas. A pesar de su relativa inoperancia, las reformas han sido la causa fundamental de discrepancia y continua fricción entre los políticos de la Democracia Cristiana y los dirigentes de las poderosas asociaciones empresariales, y han propiciado un permanente clima de inestabilidad a lo largo del año, que en va-



rias oportunidades se tradujo en conatos de golpe de Estado. Que estos intentos no fructificaran hay que atribuirlo en última instancia al apoyo de los Estados Unidos.

Si el actual gobierno no ha podido avanzar las reformas iniciadas, tampoco ha sido capaz de controlar los aparatos represivos y conseguir por la vía de la pacificación lo que no podía conseguir por el camino de las transformaciones sociales. Así, el grupo gobernante no ha podido lograr esa legitimidad social mínima que justificara su presencia en el poder y le permitiera proponer un proyecto político coherente para el país. De este modo, la dirección del país ha ido pasando progresivamente a manos norteamericanas, más interesadas en la confrontación con la Unión Soviética que en resolver los problemas de El Salvador. El actual gobierno de Estados Unidos no siente la urgencia de terminar una guerra cuyo costo le parece menor que el de tener "otra Nicaragua" en Centro América. Así, el entreguismo político a los dictámenes de una administración obsesionada con un anticomunismo simplista ha impedido a los dirigentes de la Democracia Cristiana salvadoreña ser consecuentes con sus propios principios democráticos y cristianos, y ha bloqueado uno tras otro los caminos de solución racional que se fueron presentando a lo largo del año para resolver el conflicto.

Tampoco las fuerzas insurgentes han ayudado a resolver la crisis política del país. Por el contrario, tanto sus divisiones internas como su inoperancia a la hora de explicar al pueblo su accionar militar han sido factores que han contribuido objetivamente a hondar la crisis política del país. Los principales grupos político-militares que componen el FMLN no han resuelto sus grandes diferencias, perdiendo así eficacia y capacidad operativas.



Más aún, en 1981 el Frente Democrático Revolucionario no se ha hecho suficientemente presente en el ámbito nacional: el proyecto político popular, esbozado en la Plataforma de Gobierno Democrático Revolucionario, no ha sido desarrollado ni explicado al pueblo, y ni siquiera los éxitos militares de las fuerzas insurgentes han sido capitalizados políticamente en beneficio de ese proyecto popular. Todo ello ha oscurecido la razón política de la guerra, que ha quedado como hecho brutal, carente de perspectivas y sin visos de solución.

El resultado ha sido que 1981 ha visto la cancelación del proyecto surgido del movimiento de octubre de 1979, sin que las fuerzas en el poder ni las fuerzas insurgentes ofrecieran un proyecto político alternativo, realista, claro y esperanzador, capaz de aunar fuerzas y voluntades. Al término del año, El Salvador se encamina hacia un proceso electoral para el que no existen condiciones mínimas de viabilidad, en cuya pureza nadie confía, al que sólo se han presentado contados grupos políticos, todos ellos identificados con los sectores tradicionalmente en el poder, y que en modo alguno plantea los problemas cruciales que aquejan al país. El proceso electoral anunciado para marzo de 1982 no pone en juego lo único que debería poner un verdadero proceso democrático: el poder político. Los actuales dirigentes de la Fuerza Armada no parecen dispuestos a ceder su actual hegemonía política y mucho menos a grupos populares que en varias oportunidades han reclamado su reestructuración cuando no su destrucción. Esto, que parece obvio, muestra a las claras los límites de un proceso electoral en la actual situación de El Salvador, así como su verdadero sentido. En definitiva, las elecciones no pretenden poner fin a la guerra, sino legitimarla; no buscan la reconciliación democrática de los salvadoreños, sino

la aniquilación militar de las fuerzas insurgentes. Unas "elecciones bajo las balas" terminan siendo unas elecciones para justificar las balas.

3. El deterioro socioeconómico.

Desde 1979 El Salvador ha entrado en un proceso de franca crisis económica, que ha contribuido a agravar el conflicto político y social. La guerra desatada en 1981 no ha hecho sino ahondar esa crisis, acelerando el desmoronamiento de la estructura productiva del país. Sería erróneo atribuir a la guerra y particularmente al sabotaje la causa de los males económicos que aquejan a El Salvador; pero sería también erróneo ignorar los efectos devastadores que, una vez desatada, está teniendo sobre la economía la actual guerra civil.

Los datos sobre la situación económica a finales de 1981 muestran un derrumbe de tal envergadura, que los mismos técnicos aseguran que se ha retrocedido a niveles de hace década y media, sin que quepa esperar que se ha tocado fondo. El producto territorial bruto de 1981 ha sido el menor desde 1970, el consumo del salvadoreño promedio ha sido el más bajo de los últimos veinticinco años y nunca el país se ha encontrado con un déficit tan grande en sus reservas internacionales. A la descapitalización del país, que comenzó antes de la guerra, hay que añadir ahora el insaciable consumo de recursos por parte de la maquinaria bélica, así como la desarticulación sectorial y geográfica del aparato productivo del país. A ello ha contribuido significativamente el sabotaje, sistemático y creciente, realizado por las fuerzas del FMLN y que ha afectado sobre todo al sistema nacional de distribución de energía eléctrica y de comunicaciones. En una economía así, no es de extrañar que sólo cuatro de cada diez salvadoreños en edad de trabajar hayan encontrado ocupación estable mientras el índice general de precios aumentaba en un 54%.

Junto al derrumbamiento progresivo del sistema económico, y en el marco de la crisis política y de la confrontación militar, las estructuras sociales del país han entrado en franco proceso de desintegración. En 1981, poblados enteros han sido borrados del mapa por efecto de la guerra, mientras grandes zonas se velan estranguladas entre los embates de las fuerzas contendientes y la población civil tenía que emigrar. Son ya cientos de miles los salvadoreños desplazados de su lugar de origen por la violencia represiva y bélica. Muchos de ellos han buscado refugio en otros países, en algunas ocasiones teniendo que someterse a condiciones humillantes de dependencia y vulnerabilidad; otros son atendidos en los numerosos refugios que han ido surgiendo en diversas partes del país y que a veces carecen de condiciones mínimas de habitabilidad.

La inoperancia tradicional del sistema judicial salvadoreño se ha visto agudizada en 1981, incapaz de enfrentar al ejecutivo o a los cuerpos policiales respecto a las exigencias mínimas en la administración de la justicia. El sistema educativo ha sido duramente afectado por la insistente represión contra el gremio magisterial, y la indefinida ocupación militar de la Universidad de El Salvador se ha querido compensar con la proliferación incontrolada de universidades privadas, más orientadas al lucro que al servicio. La canalización de los principales recursos económicos del país al gasto militar y el agravamiento de la corrupción a determinados niveles administrativos ha dejado cada vez más desatendidas áreas críticas de la vida social, como la salud pública, la vivienda o el transporte. Desde ahora se puede anticipar que, cuando El Salvador salga de la guerra y se mire a sí mismo sin el prisma de la demagogia, se va a encontrar miserable y desnudo, ignorante, hambriento y enfermo. El día en que se quiera iniciar una justa reconstrucción del país, se hallará que nuestros problemas fundamentales presentan características de catástrofe.

Desde el punto de vista interpersonal, la guerra ha servido para polarizar a los diversos grupos y sectores del país, resquebrajando las normas cotidianas de la convivencia social. La aguda conciencia sobre los intereses en conflicto no permite guiarse en el día tras día por los dictados del sentido común y la irracionalidad imperante obliga a temer en cualquier momento las reacciones más imprevisibles y aun las más nocivas por parte de los demás. La desnaturalización de las instituciones encargadas constitucionalmente de mantener el respeto a la ley ha hecho que cada cual busque por su propia cuenta la manera de sobrevivir en medio del caos, lo cual, en última instancia, termina favoreciendo al más fuerte y al menos escrupuloso, al que puede rodearse de muros más altos o comprar un arma más poderosa.

Sin temor a equivocarnos podemos asegurar que, al término de 1981, una gran mayoría de salvadoreños está cansada. Cansada de hambre y de guerra, de violencia y de odio, de represión y de demagogia, de odios y mentiras. Agobiada por el sufrimiento de la opresión y la injusticia secular, una gran parte del pueblo salvadoreño está hoy cansada de una guerra que le maltrata y le mata, sin que los acontecimientos de 1981 hayan abierto suficientemente el horizonte de un futuro mejor.

4. Las lecciones de 1981.

Es difícil realizar a estas alturas un balance global de 1981. La guerra civil se encuentra en marcha y muchos de los procesos fundamentales que han caracterizado al año no se han cerrado todavía. A cincuenta años del levantamiento popular que en 1932 conmocionó las estructuras oligárquicas del país y que obli-



gó a entregar el poder político en manos militares, lo menos que se puede decir es que el sistema vigente no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales que entonces quedaron planteados. El régimen de explotación económica y represión popular vivido durante este medio siglo en El Salvador no ha sido capaz de dar respuesta ni a uno solo de los grandes interrogantes que abrió la revolución del 32. Algunos pretenden hoy lograr una victoria militar que "gane" otros cincuenta años de paz oligárquica, aunque ello sea a costa de la vida de muchos miles de salvadoreños. Semejante proyecto no es sólo éticamente inaceptable, sino que es políticamente inviable, ya que se basa en un diagnóstico miope sobre el presente conflicto. No son los insurgentes la causa del conflicto, sino que el conflicto objetivo ha llevado a la insurgencia popular. Sería deplorable, entonces, que se buscara hoy una salida genocida a la guerra actual, para tener que retomar una vez más el problema fundamental de explotación, opresión e injusticia dentro de unos pocos años, pero agudizado hasta el paroxismo.

Todo ello hace pensar que es muy grave la responsabilidad que ha asumido la actual administración norteamericana del señor Reagan al desfigurar gravemente los términos del conflicto salvadoreño y bloquear en nombre de una concepción tras-

nochada del mundo las pocas vías racionales de solución que se nos presentan a los salvadoreños. El actual intervencionismo norteamericano en El Salvador es intolerable, y la mejor manera de mostrar su irracionalidad es aplicando al conflicto en nuestro país las prescripciones que el propio señor Reagan o sus principales colaboradores aplican al conflicto en Polonia. Exigen los norteamericanos que los soviéticos no intervengan militarmente ni presionen a los militares polacos; exigen que se supriman las medidas de excepción y que se respeten los derechos humanos; exigen al gobierno polaco que dialogue y negocie con el sindicato Solidaridad para buscar una solución al conflicto. ¿En base a qué una lógica tan radicalmente distinta cuando se trata de El Salvador?

A pesar de lo doloroso que ha sido para los salvadoreños el año 1981, creemos que de él se pueden sacar importantes lecciones. Quizá la primera y fundamental es que, por la vía armada, el conflicto de El Salvador no encontrará una solución pronta ni aceptable y, en definitiva, no encontrará una solución. Ambos contendientes reconocen, de hecho cuando no de palabra, que no han logrado el triunfo militar; falta reconocer que lo que no han logrado en 1981 no lo lograrán tampoco en 1982 ni en un futuro previsible; falta sobre todo reconocer que, aunque pudiera lograrse el triunfo militar, la destrucción humana y material del país sería tan grande, que no quedaría pueblo ni poblado para celebrar la victoria. Esto significa que, aun cuando las armas sigan siendo un esencial elemento político, la salida al conflicto, y más su solución, hay que buscarla por otros medios.

Otra importante lección que ha dejado 1981 es que las fuerzas sociales de El Salvador son más diversas y complejas de lo que pretende el discurso ideológico de los contendientes. Es cierto que el enfrentamiento ha mostrado la existencia de dos grandes fuerzas sociales, minoritaria y pro-oligárquica la una, popular y mayoritaria la otra. Sin embargo, la misma contienda ha mostrado la complejidad de los sectores que conforman esas fuerzas, sus discrepancias y divisiones objetivas, así como la existencia de otros amplios sectores, burgueses, medios y populares, que por una u otra razón no se han unido a ninguno de los contendientes. Esta complejidad de las fuerzas que configuran el mapa social de El Salvador, en el marco objetivo de su pequeñez material y de su ubicación geopolítica a la sombra de los Estados Unidos, es un dato que deberá tener muy en cuenta cualquier salida al conflicto que quiera llegar a ser verdadera solución.

1982 nos presenta el reto urgente de detener la guerra cuanto antes. El país no puede permitirse este sistemático aniquilamiento de los hijos más dinámicos y valiosos de su pueblo ni la prolongada destrucción de sus escasos recursos materiales. La cuota pagada es ya excesiva, y razones de simple supervivencia histórica nos exigen poner un alto inmediato a esta destrucción humana y material. La estigmatización mutua sólo conduce al

continuo desangramiento de los más generosos, mientras medran los crueles y los corruptos. Es la hora de la razón; es la hora del diálogo. Lo han pedido las instancias más lúcidas e independientes del país; lo reclama mayoritariamente la comunidad internacional; lo exige, sobre todo, la sangre de un pueblo cuyo clamor agónico ha conmovido la conciencia del mundo entero. Hace falta empezar cuanto antes un diálogo sincero y constructivo que haga posible la reconciliación de los salvadoreños y la construcción de una patria nueva y justa. Una patria que con razón todos puedan llamar suya, porque a todos cobija y entre todos reparte equitativamente el fruto de sus campos; una patria donde al fin se superen las injusticias seculares, se resuelvan los problemas planteados desde 1932 y se restañen las gravísimas heridas producidas por la guerra civil de 1981.

Diciembre de 1981.

